

Ataques al DF

Araceli Damián*

Una serie de eventos muestran la hostilidad del poder federal contra el DF. Uno de los más notorios es el práctico estado de sitio impuesto en el Zócalo por el Estado Mayor Presidencial en los dos eventos populares más recientes (el grito de independencia y la ceremonia oficial para recordar a los fallecidos del terremoto del 19 de septiembre de 1985).

El cada vez más penoso afán de Felipe Calderón por convencer a los “*hijos desobedientes*” de esta ciudad que es el Presidente de la República, ha provocado la violación derechos humanos fundamentales en la ciudad, y ha desatado una guerra presupuestaria (como ha sido costumbre desde hace varios años ya).

Entre los principales abusos cometidos está el no poder acceder libremente al corazón de la ciudad por vestirse de amarillo (como pasó el día del grito), o no poder llegar a éste para presenciar la tradicional ceremonia de izamiento de bandera a media asta, por no estar en la lista de invitados.

Recordar eventos trágicos como el terremoto, en medio de este hostigamiento político, hace recordar la actitud positiva de la ciudadanía de esta ciudad ante eventualidades de todo tipo. La indignante constatación de que muchos edificios habían caído no tanto por los efectos del terremoto mismo, sino por la falta de observancia en las normas de construcción, no paralizó a la ciudadanía.

Por el contrario, promovió la organización civil autónoma, lo que a su vez permitió vislumbrar la posibilidad de ejercer nuestro legítimo derecho a elegir formas distintas de gobierno. Un fenómeno detonado por una tragedia natural, pero que además develaba la cadena de corruptelas, promovió una conciencia política cuya primera expresión tuvo lugar en las elecciones presidenciales de 1988, cuando los habitantes de la ciudad votamos en contra del PRI y a favor de Cuauhtémoc Cárdenas.

La “caída del sistema”, desatada, en parte, por los resultados electorales del DF, escondía la primera muestra, a nivel macro, de la incapacidad priísta de seguir controlando el deseo popular de un cambio de gobierno. Fuimos, como seguimos siendo ahora, vanguardia de la política nacional.

Desafortunadamente, a pesar de algunos avances, aun no se ha llevado a cabo la reforma integral del DF, que le devuelva su calidad de estado libre y soberano. Muchas de las decisiones que atañen estrictamente al gobierno local y a la ciudadanía del DF tienen que pasar por el Congreso de la Unión, compuesto por legisladores electos en todo el país, la mayoría de los cuales nada tiene que ver con nuestra ciudad.

La hostil composición política en ambas cámaras frente a las preferencias electorales locales, ha permitido que el Congreso y el gobierno federal cometan actos que ponen en riesgo el bienestar y los derechos civiles, políticos y sociales de quienes vivimos en la entidad. Ejemplos sobran.

Recapitulemos algunos: 1) el ilegal reclamo del pago millonario, por indemnización, ante una supuesta expropiación de los terrenos del Paraje San Juan, realizada por un estafador ligado a Carlos Ahumada (acto respaldado públicamente por Vicente Fox); 2) el grotesco desafuero promovido por el gobierno federal, el poder judicial, e instrumentado por la Cámara de Diputados en contra del ex-jefe de gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, quien fue elegido democráticamente; 3) la intentona en la Cámara de Diputados por reducir, durante la administración pasada, el monto de recursos correspondientes al DF por participaciones federales, bajo el argumento de que la entidad recibe recursos para la educación básica (que está en manos de la Secretaría de Educación Pública, más no el gobierno de la ciudad); 4) las mentiras sobre la deuda pública del DF (cuyo crecimiento fue frenado en la administración pasada, como muestra un documento elaborado por la propia Cámara de Diputados); 5) el chantaje realizado recientemente desde la federación para autorizar el refinanciamiento de la deuda; 6) el aumento del precio cobrado por la federación al gobierno local por concepto de agua; 7) la reducción de la participación del DF en varios fondos federales en la reciente reforma fiscal; 8) sin olvidar también la toma del Estado Mayor Presidencial del Zócalo capitalino.

A pesar del constante ataque a los habitantes de la ciudad, en las elecciones pasadas, casi el 60% votamos a favor del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y un porcentaje similar refrendó, mediante el voto a favor

de Marcelo Ebrard, su convicción de que la mejor opción a nivel local está representada por los candidatos propuestos por el PRD. Sin embargo, es inaceptable que por la vía del castigo presupuestario y ante la amenaza de la militarización cotidiana, se quiera doblegar la voluntad política y la actitud crítica frente a los poderes federales, de todo un estado.

El poder federal y la camarilla prianista han frenado la reforma del DF que nos permitiría gozar de todos nuestros derechos ciudadanos. Bajo el velo de la hipocresía, los legisladores y el poder federal argumentan respetar la soberanía estatal permitiendo abusos imperdonables (como la violación de derechos humanos en Oaxaca), pero si se trata de la soberanía de DF mandan a sus levanta dedos a votar en contra.

El poder legislativo federal tiene la obligación moral de otorgar a los habitantes del DF el legítimo derecho a gozar de todas las garantías civiles y políticas consagradas en la Constitución mexicana.

*El Colegio de México, adamian@colmex.mx